

La consulta plantea dudas sobre la posible vulneración de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el hecho de que la policía local que controla el acceso a las dependencias municipales donde se celebran los Plenos del Ayuntamiento (Sala de Juntas), se recojan los datos de nombre, apellidos, D.N.I. y lugar al que se dirigen de las personas que pretendan presenciar dichos Plenos, siendo la finalidad de su recogida el control de seguridad de acceso al edificio.

I

En este sentido, conviene señalar que el tratamiento de datos de carácter personal con la finalidad de controlar el acceso a edificios, deberá ajustarse en su integridad a lo previsto en la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a edificios.

En relación con la vigencia de la mencionada instrucción, debe recordarse que para que proceda entender que la mencionada Instrucción fue derogada por la Ley Orgánica 15/1999, no basta hacer referencia al hecho de que la misma es posterior a la Instrucción, sino que aquélla debería ser contraria a las previsiones de la citada Ley Orgánica. Es decir, la derogación tácita de la Instrucción se referiría únicamente a aquellas cuestiones en que la citada norma emanada de la Agencia resultase incompatible con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, y posteriormente a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

La norma primera de la Instrucción extiende su ámbito de aplicación a “los datos de carácter personal tratados de forma automatizada que son recavados por los servicios de seguridad con la finalidad de controlar el acceso a los edificios públicos y privados, así como a establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones”.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de datos de carácter personal (LORTAD), vigente al dictarse la Instrucción 1/1996, fijaba su ámbito de aplicación extendiéndolo a aquellos datos de carácter personal que figurasen en ficheros automatizados, pero la aprobación de la Directiva 95/46/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, fijó en su artículo 3 su ámbito de aplicación al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales

contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, es decir, en un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas que permitan el fácil acceso a dichos datos de carácter personal.

La transposición de la Directiva 95/46 al ordenamiento español se efectuó a través de la actual Ley Orgánica 15/1999, en cuyo artículo 2.1 dice que “será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. Definiendo su artículo 3 c) el tratamiento de datos como “operaciones y procedimientos técnicos **de carácter automatizado o no**, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

Por consiguiente, la compatibilidad de la Instrucción 1/1996 con la innovación introducida directamente por la Directiva 95/46 en cuanto a su aplicación a los tratamientos no automatizados, y posteriormente por la LOPD, exige que la misma extienda sus efectos también a éstos.

II

La norma segunda de la citada Instrucción establece que “Tendrá la consideración de responsable del fichero la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo por cuya cuenta se efectúe la realización del servicio de seguridad.

Es preciso señalar que la Policía Local forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues así lo dispone el artículo 1.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señala que, “el mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, entre las que se incluyen, según el artículo 2 de la propia Ley “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación, los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales”.

En consecuencia, si el Ayuntamiento tiene atribuida la prestación del servicio de seguridad y control de acceso al edificio a la unidad correspondiente de la policía local, no estaríamos ante un supuesto de vulneración de la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante, ello implica, que el Ayuntamiento, como responsable del fichero, deberá asumir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Ley 15/1999, incluida la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos.

En cuanto a la recogida de datos para las finalidades descritas deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999. La norma tercera de la misma Instrucción indica que “deberá informarse de la existencia de un fichero automatizado, de la finalidad de la recogida de los datos, de los destinatarios de la información, del carácter obligatorio de su respuesta, de las consecuencias de la negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación y de la identidad y dirección del responsable del fichero”, y además, se recogerán sólo los datos estrictamente necesarios para controlar dicho acceso.

A su vez, la norma cuarta de la Instrucción 1/1996 referida a la utilización de los datos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios señala que, “Los datos personales así obtenidos no podrán ser utilizados para otros fines. Tampoco podrán ser objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento del interesado”

Por este motivo, con carácter previo a la introducción de los datos de los vecinos en el fichero administrativo al que se refiere la consulta debería darse por el Ayuntamiento cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual:

“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.”

En consecuencia, debería indicarse al interesado qué dependencia municipal va a ser responsable del tratamiento, ante la que poder ejercitar sus derechos y la finalidad del fichero.

A su vez, la norma cuarta de la Instrucción 1/1996 referida a la utilización de los datos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios señala que, “Los datos personales así obtenidos no podrán ser utilizados para otros fines. Tampoco podrán ser objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento del

interesado”. Se da así cumplimiento al principio de finalidad recogido en el artículo 4 de la LOPD.

También en relación con la aplicación de la Instrucción 1/1996, deberán observarse las instrucciones referidas a la cancelación de los datos que recoge la norma quinta al disponer que, “los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados”.

El plazo de un mes es concreción de lo establecido en el artículo 4.5, párrafo primero de la Ley 15/1999, que dispone que “los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

Ello supone la necesaria vinculación de la conservación del dato a la finalidad que justifica su recogida, siendo así que por esta Agencia, en la Instrucción a la que se refiere la consulta, ha considerado que resulta suficiente a tales efectos la determinación del período de un mes al que acaba de hacerse referencia.

Así mismo, deberá respetarse el principio de proporcionalidad en la recogida de datos en relación con la finalidad perseguida, señalando el artículo 4.1 de la LOPD que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.”

En el supuesto contemplado los datos que son recogidos, nombre y apellidos, DNI, y dependencia administrativa a la que se dirijan los afectados, debe entenderse que se ajustan a lo señalado anteriormente.

Por último, los datos que se recojan para las finalidades descritas, estarán sujetos a las medidas de seguridad previstas en el artículo 9 de la LOPD y 79 y siguientes de su Reglamento, Real Decreto 1720/2007.